

2011



Mexican Rural Development Research Reports

A close-up photograph of several ears of corn in various colors, including yellow, red, black, and white, arranged in a cluster.

Construcción del Primer Observatorio Campesino Estatal de Políticas Públicas

- Iniciativa de la Red de Empresas Campesinas Comercializadoras de Michoacán
- Relatoría de las deliberaciones en la Asamblea Estatal de la Red, en Uruapan

Lourdes Edith Rudiño
La Jornada del Campo

Reporte 22

Construcción del Primer Observatorio Campesino Estatal de Políticas Públicas

- ***Iniciativa de la Red de Empresas Campesinas Comercializadoras de Michoacán***
- ***Relatoría de las deliberaciones en la Asamblea Estatal de la Red, en Uruapan***

Lourdes Rudiño

Periodista colaboradora de *La Jornada del Campo*

Agosto de 2011

La Red de Empresas Campesinas Comercializadoras de Michoacán (REDCCAM) realizó el 8 y 9 de junio de 2011 su Asamblea Estatal de Evaluación y Seguimiento en los Procesos Productivos, Comerciales, Organizativos y Financieros, y en ese marco inició su diálogo interno para comenzar a construir lo que se denominará Observatorio Campesino de Políticas Públicas.

Esta iniciativa del Observatorio, se dijo, se desarrollará de forma paulatina, con pasos lentos pero firmes –en principio sobre los programas Agricultura por Contrato, que es federal; Activos Productivos en sus vertientes agrícola, pecuaria y de desarrollo rural, del ámbito estatal, y los programas que se aplican en el distrito de desarrollo rural (DDR) de Morelia-- y las decisiones posteriores habrán de surgir de los resultados que se vayan generando.

En la asamblea se fue moldeando el interés campesino por influir sobre las decisiones de política pública –en el diseño programático del presupuesto, en las definiciones amplias que desde el Estado se tomen respecto al medio rural y su papel en el desarrollo nacional--; no se trata aquí de un ejercicio de la REDCCAM o de la organización nacional a la que pertenece (la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC), de acceder simplemente a algunos proyectos o recursos de apoyo específicos y circunstanciales. Es algo de mucho mayor trascendencia.

Este reporte se centra en una conferencia específica presentada en la Asamblea sobre experiencias de observatorios ciudadanos existentes en México, y en la mesa de discusión desarrollada en la misma asamblea sobre la iniciativa del Observatorio de Políticas públicas, e involucra entrevistas hechas de forma individual con algunos de los participantes en la mesa, todos ellos líderes de agrupaciones locales miembros de la REDCCAM.

Sin embargo, para ubicar el contexto de esta discusión y mostrar cuáles son los temas que hoy día preocupan y ocupan a la REDCCAM y en general a los socios de ANEC, enseguida se describe brevemente la actividad de la Asamblea.

La reunión, realizada en un hotel a las afueras de la ciudad de Uruapan, inició con una presentación de Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC, relativa a “Balances y

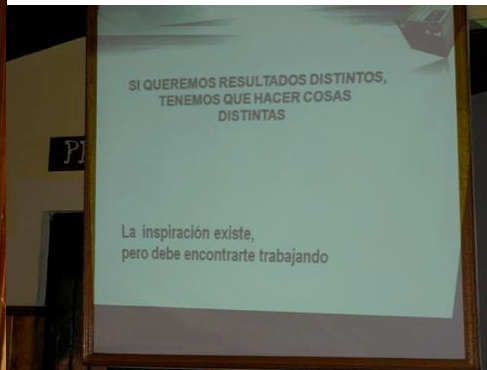
perspectivas” de la Red y de la propia ANEC; destacó la importancia de que los campesinos amplíen su información y conocimiento sobre lo que ocurre no sólo en México sino en todo el orbe, y no sólo en la agricultura, sino en diversas situaciones que indirectamente repercuten en el campo aunque en apariencia le resultan ajenas.

Suárez Carrera habló del calentamiento global y fenómenos relacionados como huracanes, inundaciones y sequías, que afectan a los mercados agrícolas a veces de forma anticipada, dada la especulación en las bolsas de futuros. Pero también dijo que los productores del campo deben poner atención a noticias tales como la de las explosiones de plantas nucleares en Japón luego del terremoto ocurrido en marzo pasado en la isla, pues éstas han derivado ya en la decisión de algunos países, como Alemania, de prescindir de energía nuclear y en cambio impulsar su producción de energía alternativa, incluida la que se genera a partir de insumos agrícolas como el maíz y la soya. Decisión que se aúna a las políticas en marcha de Estados Unidos y del bloque de la Unión Europea de fomentar los agrocombustibles, y que ya desde hace años impulsan los precios agrícolas mundiales al alza. Este tipo de noticias, comentó, debe verse como una oportunidad, pues es previsible que los precios de los alimentos se mantengan altos en el futuro y ello debiera traducirse en mayor interés por producir y elevar rendimientos.



Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC, en la Asamblea Estatal de la REDCCAM

El encuentro incluyó después varias conferencias: “Experiencias de gobiernos corporativos campesinos y toma de decisiones colectivas” y “La sostenibilidad de la empresa campesina en tiempos difíciles: fortalezas y debilidades”, dictadas por los equipos técnicos de la ANEC y de la REDCCAM. Y en el tema que nos ocupa aquí, el Observatorio Campesino, Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, AC, hizo una presentación denominada “Experiencias en la realización de observatorios ciudadanos”.



Aspectos de la Asamblea en las conferencias dictadas por directivos y equipo técnico de la ANEC y de REDCCAM

Posterior a todo esto, los participantes en la asamblea, unas 40 personas, se dividieron en mesas de trabajo: la primera, sobre “Órganos de gobierno en las organizaciones campesinas”; la segunda denominada “Observatorio de políticas públicas, REDCCAM, políticas públicas en Michoacán: Estrategia de evaluación e incidencia en políticas públicas”; la tercera fue sobre “Sostenibilidad de la organización campesina (sistema financiero REDCCAM, fondo de aseguramiento y estrategias de desarrollo financiero)”, y la cuarta fue dedicada a “Capacitación y organización”, enfocada a la participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones, en la visión empresarial y en el modelo organizativo de la Red.

El segundo día de la Asamblea se destinó a una discusión deliberativa general donde se presentaron las conclusiones y los acuerdos de cada una de las mesas.

El Observatorio Campesino de Políticas Públicas.

A partir de aquí, este reporte se centra en el tema del Observatorio Campesino de Políticas públicas. En principio se detalla la dinámica de la conferencia dada por Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, y también la registrada en la mesa de trabajo dedicada al Observatorio. Esta mesa fue coordinada por Ivan Polanco, director de Políticas Públicas de la ANEC, y por Ana Joaquina Ruiz, investigadora del Proyecto Subsidios al Campo de Fundar; Miguel Pulido participó en la mesa estableciendo pautas.

El detalle de lo ocurrido en ambos espacios es para comprender que si bien la REDCCAM ha expresado su interés por incidir en las políticas públicas rurales, y de hecho es parte de las tareas que se autoasignó en su planeación estratégica 2010-14, no existía al momento de la Asamblea una claridad aún en las mentes de todos los miembros de la Red (hablando aquí de dirigentes locales) sobre la importancia del acceso a la información, su sistematización y su análisis, ni sobre la fuerza política y la capacidad de incidencia que pueden lograrse con un observatorio ciudadano con información en sus manos sobre programas y recursos públicos destinados al campo. Los dirigentes consideraban que el participar en órganos locales, regionales y estatales de Consulta era incidir en políticas públicas. Conforme se desarrolló el diálogo, el entendimiento de la utilidad del Observatorio y la conciencia sobre el poder de éste fueron creciendo.

Las dinámicas de la conferencia y de la mesa buscaron deliberadamente provocar inquietudes e incitar la participación de los dirigentes campesinos para que discutieran por qué y para qué sirve el contar con información sistematizada por la sociedad civil; qué primeros elementos (programas públicos) elegir como objeto del Observatorio Campesino, y la mecánica inicial a desarrollar en este observatorio con pautas establecidas por los participantes en la mesa e involucrando de forma activa a los socios de la REDCCAM.

Posteriormente el reporte expresará de forma conclusiva --y con base en las entrevistas individuales realizadas-- cuál es la percepción de los socios de la REDCCAM sobre la forma en que se ejercen los recursos públicos rurales federales, estatales y municipales en Michoacán; sobre la manera en que ellos como dirigentes pueden hoy día incidir en tal ejercicio; sobre el acceso a tales recursos; y sobre el efecto de éstos en el campo; en la producción y en la situación socioeconómica de los campesinos. Asimismo, sobre la utilidad e importancia que le conceden al ahora incipiente Observatorio Campesino.

Ésta es la parte más importante del reporte, pues muestra los elementos nodales y conclusivos de las consideraciones de los participantes en la discusión. Sin embargo, se presenta al final del reporte, para mantener el formato cronológico del desempeño de los acontecimientos de la reunión de Uruapan.

Es pertinente destacar que el origen de esta iniciativa proviene de decisiones de 2009. Así lo explica Omar Lando Estañol, gerente de la REDCCAM:

(El interés por un observatorio campesino) se plasmó en nuestra planeación estratégica que tuvimos en 2009; ahí quedo en el plan estratégico. Y que por cierto era a cinco años, hasta el 2014. No se especificó como observatorio de políticas, pero sí se especificó que teníamos que incidir en las políticas públicas, participando en los diferentes órganos de decisión, tanto municipales, estatales y nacionales.

Destaca el hecho de que la iniciativa de crear el Observatorio Campesino fue en principio expuesta por la REDCCAM en el Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán (Cococam), el cual funge como coordinadora estatal de organizaciones, y que tiene como interlocutor al gobierno estatal, para la gestión de proyectos primordialmente.

En el Cococam participan organizaciones de corte tradicional, sobre todo con enfoque político, y también agrupaciones que fueron parte de lo que otrora se llamó Movimiento El Campo no Aguanta más (Mecnam) --movimiento éste integrado por un amplio conglomerado de centrales y agrupaciones campesinas, que surgió en 2002 en la coyuntura de la liberalización de la mayoría de las fracciones arancelarias agropecuarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que indujo la firma del Acuerdo para el Campo, en abril de 2003, pero que luego se desintegró por pugnas precisamente por la aplicación de ese Acuerdo.

Según Omar Lando Estañol, los otros participantes del Cococam faltaron a una reunión con Víctor Suárez para tratar el asunto del Observatorio, programada a fines de 2010 y luego, en febrero de 2011, se tenía ya un compromiso para que investigadores de Fundar establecieran diálogo con la REDCCAM (un taller de dos días, según comenta Ana Joaquina Ruiz), y hubo una cancelación dos días antes de parte de las otras organizaciones del Cococam. La razón: les surgió un compromiso para una reunión destinada a “bajar” recursos para el programa de Vivienda Rural. De acuerdo con Omar Lando:

Yo siento que es algo que no les interesa. Saben que no tienen las herramientas suficientes para poder negociar con el gobierno, pero no echan la mano ahí (en la opción del observatorio); se preocupan más por bajar recursos. Con el Cococam el gobierno dice: “hay que darles lo que te pidan, su relación de proyectos, y los vas a tener tranquilitos”. Entonces alguna autocrítica ha surgido ahí de que en el Cococam son “maiceros”, porque nada más van a que los “maiceen”.

La decisión de la REDCCAM entonces fue proceder por su cuenta con la reunión con Fundar y con ANEC, para dar los primeros pasos del Observatorio, si bien es cierto que, de acuerdo con lo deliberado en la mesa de trabajo, la Red promoverá la participación del mayor número de organizaciones posibles, incluidas las del Cococam, para potenciar la capacidad de acopio de información sobre el ejercicio de programas públicos para el campo.

1.- La presentación de Miguel Pulido, de Fundar.

Miguel Pulido realizó su exposición a todo el auditorio (dirigentes de las organizaciones locales y miembros de éstas) sobre la experiencia de tres observatorios ciudadanos en diversas partes del país. La segmentó en tres bloques. Luego del primero –que fue descriptivo de los observatorios-- “provocó” a los campesinos a que participaran y dijeran qué les inspiraban las experiencias. Aunque no hubo una respuesta amplia, masiva de los campesinos, sí hubo quien señaló que “sería bueno organizarnos como ciudadanía, para conocer los ingresos y los egresos que el estado (Michoacán) marca para el sector agropecuario”. Fue Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, la organización más grande en número de socios de la REDCCAM.

El segundo bloque fue para hablar de los logros concretos de los observatorios y el tercero fue para hacer reflexiones sobre las ventajas y retos que éstos tienen.

Las experiencias descritas por Miguel Pulido fueron:

a) Un observatorio de muerte materna en Chiapas. En México hay 60 mujeres muertas por cada diez mil nacimientos, y la proporción es más alta en estados pobres, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En Argentina la cifra es de cinco por cada diez mil nacimientos. “México ha firmado un tratado internacional; está comprometido con las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, y tiene los instrumentos jurídicos y financieros para bajar la tasa de mortalidad materna. Sin embargo, no lo logra”, dijo y relató que un grupo de mujeres se organizó y creó el observatorio; involucró a parteras; médicas especialistas, académicas que estudian este tema desde la perspectiva de la salud pública, y organizaciones de la sociedad civil que hacen análisis de presupuesto, entre ellas Fundar. Conjuntamente estos actores comenzaron a observar distintos espacios de decisión del gobierno: desde la atención en terreno --la canalización que se da a las mujeres en las clínicas cuando llegan— hasta cuánto dinero del presupuesto federal se aplica para ese concepto.

“Ese ejercicio articulado, multiactor, entre un montón de gente que está preocupada por un tema concreto, se tradujo en un observatorio y éste lo que hace es sumar a distintos actores con distintos intereses para participar”.

El observatorio logró en Chiapas cambiar el paradigma de atención: “se logró incluir a las parteras dentro del cuerpo médico. Se les dio ese estatus, cuando antes se les tenía marginadas; se creó el Comité Nacional para una Maternidad sin Riesgos y se ha etiquetado presupuesto federal específicamente para ese rubro. Se tiene además una mesa de discusión interinstitucional; en cada negociación presupuestaria se sienta la Secretaría de Salud y muchas otras dependencias y discuten cómo se gastan los recursos públicos”. Este observatorio demostró con evidencia que el gobierno desperdicia recurso público, que no le pertenece, y que hay comportamientos patrimonialistas y arreglos entre camarillas, afirmó Miguel Pulido.

“Que las mujeres se mueran no significa que eso se deba quedar así, y que las cosas sucedan así no significa que no se puedan cambiar. Y que las cosas vayan cambiando poco a poco no es malo; malo sería que las dejáramos iguales”.



Miguel Pulido, de Fundar, comentando experiencias de observatorios ciudadanos

b) La siguiente experiencia mencionada fue la del observatorio de derechos lingüísticos en Oaxaca. Fue creado por unos 12 abogados jóvenes que reivindican su pertenencia a una comunidad indígena, y cuestionan por qué a los indígenas se les imparte justicia en español, cuando la Constitución mexicana establece que la población debe ser juzgada en su propia lengua, y cuando existen leyes que garantizan el derecho de la gente a hablar y a expresarse en su lengua. El observatorio inició preguntando al gobierno de Oaxaca cuánto gasta en capacitación de traductores, quiénes son y dónde están. La respuesta fue que no hay traductor alguno.

Entonces el observatorio comenzó a monitorear en los juzgados cómo es que se imparte justicia y realizó observación constante y preguntas a los jueces sobre qué hacen cuando hay una persona que necesita ser juzgada en lengua indígena. Las respuestas fueron del estilo de “no, pues aquí el policía habla su lengua; le damos 200 pesos y la traducción que hace se integra al expediente”. Esto es, dijo Pulido, hay un servicio no profesional que interviene en el acceso a la justicia.

El Centro de Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), donde están integrados los abogados mencionados, presentó un informe en la Ciudad de México en mayo pasado, y allí el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López Sánchez, estuvo

presente y se comprometió específicamente a ver cómo van a capacitar a los traductores, cómo van a lograr una política que logre hacer de la traducción una realidad. “Sólo denunciando con la evidencia se logró un pequeño cambio, pero se logró”, dijo Pulido.

c) La tercera experiencia relatada fue la del Monitor Civil de la Policía de Guerrero. En el municipio Tlapa de Comonfort, dijo Pulido, hay una tasa altísima de violación de los derechos humanos y abusos policiales tremendos. Con la intervención del ejército en tareas de seguridad, se acrecentaron tales abusos; ahora también por parte de los soldados. Una organización, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con Fundar y con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) crearon el monitor mencionado. “Fue una necesidad, expresada por abogados que ya no encontraban solución por medio de presentar denuncias ante las comisiones de derechos humanos, y el monitor aprovechó la autoridad moral de Tlachinollan para presionar al gobierno”, comentó Miguel Pulido.

Este monitor empezó a observar y documentar lo que estaba haciendo la policía, a levantar reportes de todos los abusos policiales y a emitir un reporte al cierre de cada mes. El resultado es que “en los años recientes, las extorsiones se redujeron un poco, pero los policías tuvieron que devolver el dinero que habían quitado a la gente por extorsiones (...) En una intervención del ejército, los soldados se llevaron de una casa un refrigerador, un televisor y un portón. Las personas fueron a la oficina del monitor civil y presentaron su queja. Como se publica un informe que dice quiénes cometieron violaciones y abusos, con ese informe preparado se acudió al cuartel de la zona militar y al coronel se le dijo ‘¿qué hacemos?, devuelvan la televisión, el refrigerador y el portón o esto va a salir publicado en el informe’. ‘A ver muchachos, ¿dónde están esas cosas?’, y van de regreso. El poder de publicación de un informe le preocupa a la Secretaría de la Defensa Nacional y devolvieron las cosas”.



Presentación de Miguel Pulido, de Fundar

Pulido dijo a la audiencia: “¿Alguien cree que se necesitaría para la política rural una suerte de observatorio? El pueblo está urgido de atención, las demandas no las sacan de sus ocurrencias, existe un presupuesto público, un mandato legal, existen dependencias. Lo que hacen los observatorios es ver detenidamente qué es lo que hacen las dependencias y entender por qué no

logran los resultados que deberían de tener. A mí se me ocurre que en política rural podría ser necesario algo del estilo”.

Olga Alcaraz respondió: “Sería bueno organizarnos como ciudadanía, conocer los ingresos y los egresos que por estado marca para el sector agropecuario”. Dijo que ella ha acudido a reuniones, algunas en la Ciudad de México, ha visto documentos y verificado cifras y detecta que en 2010 hubo un desfaldo millonario en la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán (Sedru) y que en este 2011 hay un desvío de más de 600 millones de pesos (casi la mitad del presupuesto total del estado para rubros rurales), y eso es muy molesto porque no fue el gobierno estatal el que gestionó este presupuesto, sino las organizaciones campesinas en cabildeo con la Cámara de Diputados. Dijo que es difícil avanzar en el acceso a la información, “pero creo que son cosas que ya hemos conquistado y no vamos a dar un paso atrás, al contrario. Pero eso implica que más organizaciones, que más personas estén informadas de lo que está pasando”.



Olga Alcaraz, directora de Agricultores Unidos, Región Guayangareo

Omar Lando Estañol dijo por su parte que si bien es cierto que el gobierno estatal dice que abre las puertas a la población para que participe en la presupuestación de los programas y de sus líneas estratégicas, “no podemos emitir una opinión. Queremos cambiar las cosas pero no tenemos las herramientas para hacerlo. Desconocemos cómo se ejecuta el gasto rural; nada más se nos ha presentado la lista de programas con el monto asignado de presupuesto, y allí queda todo. Las decisiones que toma el gobierno no sabemos para dónde van, cómo se ejecutó (el recurso), si se ejecutó todo, si se hicieron economías y eso repercute en los productores. Hay una fuerte demanda para proyectos y necesidades y no se cumple porque el presupuesto, no se gasta de manera eficiente”.

Miguel Pulido provocó reacciones de la gente: “Bueno, si el gobierno malgasta su dinero, qué me importa, malo que fuera a mi casa y se gastara mi dinero, pero el que se malgasta es el del gobierno. ¿O no?”

Se observó en la reunión una preocupación constante en la audiencia acerca de la confrontación política existente entre el gobierno federal (en manos del Partido Acción Nacional) y el estatal (del

Partido de la Revolución Democrática), pues, dijeron varios, esta tensión afecta los acuerdos de integración de presupuesto rural Federación-estado, y repercute en recortes a este gasto. Y también predominó una gran preocupación sobre la forma como se ejercen los recursos, implicados los métodos corruptos que involucran a funcionarios y organizaciones campesinas, pero sin ligar esto directamente con la utilidad del Observatorio. En el intercambio de comentarios con Pulido se vio muy claramente. Uno de los asistentes dijo:

Hay algo importante. En Michoacán se vive una situación difícil entre los gobiernos estatal y federal. Las organizaciones que están supuestamente dentro de la repartición del presupuesto son los paleros. En nuestras propias organizaciones, o algunas gentes, se prestan a autorizar y son los que validan. Se hablaba de que el presupuesto rural no se había ejercido. Ya está ejercido, ya entregaron, ya se hizo la Cruzada del Maíz, ya la entregó el gobernador, ya entregaron maquinaria. ¿Qué sucede, que a nosotros no nos tocó, pero ya se repartió y ¿quién lo hizo?, pues el gobierno con los grupos que ellos determinan y ya. Lamentablemente, la lucha por el poder es muy grande (...) Un ejemplo, lo que es Activos Productivos o Alianza (un programa de apoyos a la capitalización antes denominado Alianza para el Campo): se le da al gobierno estatal la oportunidad de ejercer, y ¿qué sucede? “Este dinero es mío y aquí nadie lo toca más que yo”, y lo que nos haya dicho a los productores, a los representantes, pues eso no es válido. Es un poder, y lo he visto, hay determinados líderes que se prestan para validar y hacer. Ya después te dicen: “ya se aprobó en la reunión fulana”. Lo que yo digo es que es que hay una lucha por el poder y que los líderes que están cerquita son los que se llevan la tajada.

En la parte final de la exposición, Pulido habló de las ventajas y desventajas de los observatorios. Dijo a los miembros de la REDCCAM que el objetivo de platicarles las tres experiencias mencionadas fue “para inspirarlos”:



Miguel Pulido, de Fundar, escuchando planteamientos de los campesinos

Cuando la gente quiere, se puede organizar para hacer un observatorio. Los observatorios tienen resultados prácticos. Si las parteras de Chiapas se pueden organizar, que tienen mucha menor capacidad económica, técnica y política que ustedes, no puedo creer que un grupo o una Red del tamaño de la REDCCAM no pueda organizar un observatorio que tenga la sistematicidad de ver qué es lo que hace su gobierno. Las ventajas son: los observatorios canalizan la energía política a puntos concretos. Ustedes tienen mucha energía política. El punto está en que si ustedes tienen varias preocupaciones, las pueden atender de manera conjunta o por separado. Me parece que la razón por la cual están unidos en este colectivo es porque quieren atender ciertas cosas juntos. Podrían decidir atender asuntos de política pública juntos, eso lo que hace es canalizar la energía política hacia un cierto punto. Segunda ventaja que tienen los observatorios: replantean los términos de relación con el gobierno porque ya no discuten con base en dimes y diretes sino con evidencia generada por la observación.

En los tres casos (expuestos) los términos de discusión con el gobierno cambiaron. El ejercicio de ordenar información obliga al gobierno a que no pasen estas cosas de que “no sé”, “nadie sabe”, “ni sabes qué me vienes a preguntar”, o “no es cierto eso que me están diciendo”. Con los observatorios se le dice al gobierno: “bueno, pues yo tengo cierta evidencia que a lo mejor no es la tuya, pero me tienes que contestar”.

Otra ventaja, dijo Pulido, es que se desnuda el discurso gubernamental, “pone a la luz las mentiras”. Mencionó el ejemplo puesto antes sobre el presupuesto. Ante planteamientos de funcionarios de que “ya se va a repartir el presupuesto”, dijo, el observatorio da las herramientas para decir “no es cierto, ya se repartió”. Ante el dicho de que “hay mil 200 millones”, la respuesta es “no es cierto, nosotros sabemos que son 600 millones”. O ante el dicho gubernamental de que el Procampo cuenta con 15 mil millones de pesos que benefician a 2.5 millones de campesinos, pues eso no es cierto pues el 10 por ciento de los beneficiarios se queda con más del 58 por ciento de los recursos. Y una ventaja más es que los observatorios se traducen en cambios específicos.

En cuanto a los retos, los observatorios nos obligan a construir alianzas y a dialogar con quienes a veces no estamos acostumbrados a dialogar. No es fácil, es un ejercicio de tolerancia. El otro reto es tener paciencia. Es mi responsabilidad decirles que si quieren montar un observatorio, y me estoy comprometiendo a que van a tener resultados, pues estoy convencido de eso, también es mi responsabilidad decirles que deben tener paciencia. De menos necesitan en un caso dos meses para obtener la información gubernamental pública y 15 días para ordenarla, o sea casi tres meses.

Las lecciones que dan los observatorios, según Pulido, son:

En lo que ha hecho Fundar, estos tres casos donde participamos, las lecciones aprendidas son que los observatorios son viables. Asimismo, son complementarios de otras estrategias: si ustedes quieren promover el observatorio rural, pueden seguir haciendo del eje la actividad comercial económica; la observación de lo que hace el gobierno no está peleada con eso. Además, los observatorios no funcionan si se abandonan. Si los

sembramos, los tenemos que cuidar, hay que abonarlos, acariciarlos, platicarles; requieren trabajo, y la última lección aprendida es que los observatorios desajustan el comportamiento del gobierno. ¿Qué trato de decir? El gobierno está acostumbrado a negociar y gestionar con grupos de vecinos, con el movimiento obrero, con el movimiento de maestros, con grupos campesinos, de derechos humanos, etcétera, en formas tradicionales, pero no está acostumbrado a discutir con la ciudadanía con base en evidencia ni en su propia información. Nuestro gobierno está muy acostumbrado a que puede hacer cosas estúpidas y a que no nos enteremos nosotros ni siquiera (...)

2.- La discusión en la mesa de trabajo.

Ivan Polanco, director de Políticas Públicas de la ANEC, dio inicio a la mesa con el señalamiento que la reunión sería documentada –“haremos una memoria histórica”– con la intención de replicar posteriormente la iniciativa del Observatorio Campesino en otras organizaciones miembros de ANEC, además de la REDCCAM. Él coordinó la mesa junto con Ana Joaquina Ruiz, investigadora de Fundar, y hubo intervenciones de Miguel Pulido sobre todo para establecer pautas de la discusión. Gabriela Aguirre Fernández, de Fundar, los auxilió en cuestiones técnicas.

Participaron: Omar Lando Estañol, gerente de la REDCCAM; Ignacio Martínez Jiménez, presidente de la organización Ignacio López Rayón, Ejido Aguacaliente y presidente del Consejo de REDCCAM; Joel Saldívar Monroy, representante de Temascales los Huizachales, SPR; Agustín Vázquez Galán, presidente de Productores del Cerro de La Cruz; Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, María Isabel Ruiz Parra, directora del Grupo Glalcaixt, de mujeres, del municipio de Ixtlán de los Hervores; María del Rosario Tamayo Vázquez, productora de Ixtlán de Los Hervores; e Ivan Marén y Fernando Correa, del cuerpo técnico de la REDCCAM.



Mesa de trabajo sobre el Observatorio Campesino de Políticas Públicas

Ivan Polanco planteó inicialmente que los coordinadores y técnicos de esta mesa tenían el objetivo de concluir la discusión del día con compromisos y con “una pequeña matriz que nos permita delimitar en dónde quieren hacer incidencia” los miembros de la REDCCAM. Explicó que los

observatorios pueden ser muy ágiles, y uno campesino puede tener mucha apertura, muchas formas de interacción. Comentó que es lógico que lo que afecta más directamente al productor, como son los recursos públicos, es a lo que generalmente los campesinos prestan atención, pero el círculo de las políticas públicas es más amplio.

Propuso hacer él una presentación y luego tener un intercambio para la definición de la matriz. La presentación, “Ejercicio del Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) por distritos de desarrollo rural (DDR) en Michoacán” fue elaborada por Héctor Robles Berlanga, quien, informó Polanco, es un académico que está colaborando con el equipo interdisciplinario de ANEC, Fundar y la Universidad de California.

Ivan precisó que las políticas se expresan por medio de programas y presupuestos, y que deben diferenciarse los de orden estatal de los federales. Dijo que en el ámbito estatal hay mucho recurso que se recorta y hay simulación. Y no es nada raro que surjan programas debido a presiones de grupo. En el actual gobierno de Michoacán, por ejemplo, surgió un programa llamado la Cruzada del Maíz que no existía antes pero que, se supone, nace para atacar un problema.

Lo malo con los programas es que sus recursos son limitados, y es común que ante el Poder Ejecutivo estatal los campesinos presenten 50 proyectos y tan sólo les autoricen dos; “los subsidios son insuficientes”. Pero algo que nunca sucede es la evaluación, ni a nivel estatal, ni federal, lo cual es incorrecto porque ésta daría la pauta para continuar con el programa o cancelarlo, dijo.

Ivan realizó un intercambio de planteamientos sobre un programa, el de subsidio a la tarifa eléctrica para extracción de agua del subsuelo. Preguntó a los productores si sabían qué consecuencias iba a tener ese subsidio a la larga y por qué fue que el gobierno federal decidió eliminarlo, al tiempo que nació un programa de apoyo a nuevo equipo de bombeo.



Ivan Polanco, director de Políticas Públicas de la ANEC

La razón de tal decisión, explicó, no fue buscar que los campesinos gasten menos, o por un convencimiento propio por la sustentabilidad. La decisión se dio porque el Banco Mundial llamó la atención al gobierno mexicano, diciéndole que se están sobreexplotando los mantos acuíferos y eso es negativo para el planeta. No hubo una consulta con los afectados, como no la hay en otros casos, y ello implica que las políticas no son públicas, no se determinan en acuerdo con la población; “son, más bien, políticas gubernamentales”.

Ivan dijo que el presupuesto rural se compone por un recurso estatal --que para Michoacán fue aprobado con 903 millones de pesos en 2010 y para 2011 con mil tres millones— y un recurso federal. Dijo que los datos oficiales disponibles mostraban que a septiembre de 2010 se habían ejercido 440 millones de los 903 millones, y “dudo mucho, considerando la ineficiencia del gobierno estatal, que el resto se haya gastado en octubre y noviembre, pues en noviembre se cierran las ventanillas”. De esta forma, agregó, “no es nada raro pensar que año con año haya un recorte al presupuesto, que lo que se ejerce no sea realmente lo que se aprueba, y tampoco sería raro este recorte en el ámbito federal y en las distintas secretarías” por medio de las cuales se ejerce el PEC.

Además es un hecho que año con año se dice que el PEC aprobado a nivel federal es el más alto de las historias, lo cual obedece a que el Poder Legislativo eleva los montos que propone el Ejecutivo cada año. Pero en los hechos el recurso que se ejerce es el que originalmente plantea el Ejecutivo.

Esto nos lleva a que hay que pensar qué podemos hacer. Todo depende de la construcción de la propuesta que tengamos. Podemos llegar y gritonear al gobierno del estado, y decir es que esto está sucediendo, y que hay recortes, pero si no lo tenemos sustentado, van a decir “Ah, bueno vienen los mismos gritones de siempre”. Si tenemos las cifras y llegamos y planteamos: “de acuerdo con tus datos, me has dicho que has ejercido 400 millones y estamos a septiembre 31, ¿vas a ejercer los otros 400 millones en octubre y noviembre? (...) Y una cosa muy distinta es decir “estás recortando”, y otra es decir “de acuerdo con tus estadísticas, veo que apenas has ejercido el 50 por ciento, ¿qué va a pasar con el otro 50?, ¿en qué lo vas a ejercer”. Eso nos lleva a distintos puntos de incidencia que hay que visualizar.

Ivan Polanco señaló que tal situación implica retos para la REDCCAM; por ejemplo, difundir las inadecuadas formas de asignación y ejercicio del presupuesto rural a través de los medios de comunicación; y hacer cabildeo en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que deje de ser sólo un espacio de discusión y también sirva para la construcción de acuerdos y compromisos. Y como una meta a futuro, dijo, la REDCCAM podría promover que en Michoacán se establezca un PEC estatal donde estén integrados los presupuestos rurales que ejercen diversas secretarías estatales, como la del Migrante, de la Mujer, de Desarrollo Rural y de desarrollo Social.

Con las gráficas de la presentación, Ivan mostró que el presupuesto rural para Michoacán privilegia los programas de desarrollo social, como Oportunidades, sobre los programas de fomento productivo. Comentó cruces de las diversas vertientes del presupuesto (desarrollo rural y social, competitividad, y oferta de crédito) con los DDR de Michoacán y otros indicadores, y entre

las conclusiones destacó que Zitácuaro, Morelia y La Piedad son los DDR que captan los mayores montos, y en términos per cápita es Apatzingán el número uno. En cuanto a los beneficiarios del crédito de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Zamora, La Piedad, Uruapan y Morelia son los principales.

Los productores interactuaron con Ivan para comentar que esos DDR cuentan con potencial productivo ya sea en hortalizas, cerdos, fresas o aguacate, e Ivan consideró que todos los demás distritos tienen un acceso muy escaso al crédito, y es que se confirma constantemente que los grandes productores son los que acaparan el financiamiento y una serie de prestaciones.

Ivan dijo que toda esta información tenía la finalidad de generar ideas respecto de cómo delinear el observatorio campesino.

Ana Joaquina Ruiz tomó la palabra para explicar que la página de Subsidios al Campo (www.subsidiosalcampo.org.mx) fue creada por Fundar como una herramienta en internet que permite ver quiénes reciben apoyos de Procampo, Diesel Marino, Diesel Agropecuario, Gasolina Ribereña, Ingreso Objetivo y Fomento Productivo y Mejoramiento del Café. Y una conclusión que se ha alcanzado es que hay una concentración de los recursos en pocas manos.

Lo que hicimos fue hacer solicitudes de acceso a la información. Obtuvimos los padrones de beneficiarios, lo juntamos todo en una página, y al poner el nombre de una persona, la página nos informa si ha recibido subsidios o no. Es una forma de darle seguimiento al presupuesto, cómo se está ejerciendo, pero además de saber a quiénes se está favoreciendo y por qué, y descubrimos algo que supongo que muchos de ustedes saben, que la mayor parte de los recursos se van a muy pocos productores y a muy pocos estados. Procampo concentra 80 por ciento de los recursos en 20 por ciento de los productores, Sinaloa concentra alrededor de 40 por ciento de todos los recursos federales (rurales), cosas así que nos pueden servir para entender por qué no hay tanto recurso destinado a otros estados que tal vez tengan más necesidades que Sinaloa o Tamaulipas.

Preguntó a los participantes en la mesa qué es lo que quisieran saber o ver relativo a políticas públicas y recursos para el campo, y demás indicadores expuestos en la presentación de Ivan Polanco. Dijo que ella había percibido que uno de los problemas de las organizaciones es que no cuentan con la información suficiente para pedir cuentas y reclamar al gobierno ante promesas hechas y no cumplidas; para preguntar a dónde están los recursos.

La intención de Ana Joaquina, según dijo, era “establecer una guía de pasos a seguir” para crear el Observatorio Campesino y para que empiece a trabajar y definir qué es lo que éste pretendería en el corto plazo.

“¿Qué les parece si pensamos todos en voz alta qué querríamos saber del gobierno de cara no sólo a los recursos de este año sino a los que se van a presentar para el próximo?”, planteó considerando el margen de acción de cuatro meses previo a la presentación de la propuesta de presupuesto para 2012 por parte del gobierno michoacano.



Ana Joaquina Ruiz, investigadora de Fundar

La primera lluvia de ideas de los participantes en la mesa tocó el tema político-electoral y también la discrecionalidad en la aplicación de recursos, con normas cambiantes a capricho: “Vienen las elecciones y tenemos que conservar nuestros recursos para que no sean usados y canjeados por votos”, dijo alguien. Agustín Vázquez planteó:

Lamentablemente entre el gobierno federal y el estatal hay un pleito demasiado grande; ellos mismos violan los acuerdos y todo lo que se hizo para que el gobierno del estado ejerciera, con la Sagarpa vigilando, cuando la lana (el dinero) llega a manos del gobierno estatal, éste dice “ni madres, esto es mío” y no lo aplicó y a la gente de Sagarpa les vale (no les importa) (...) en cuanto a la Cruzada del Maíz, ya se repartió, se dieron los implementos, ya tienen todo listo. Porque a ellos nos les interesan los acuerdos. Por ejemplo, en Alianza (Activos Productivos), el gobierno del estado siempre daba el 50 por ciento; ahora en la Cruzada del Maíz dio el cien por ciento con implementos cien por ciento regalados. Lamentablemente, el gobierno del estado tiene unos paleros, organizaciones políticas (...) No importa lo que diga la gente que vamos por allí al consejo (Estatad de Desarrollo Rural Sustentable).

Hubo también propuestas muy específicas. Olga Alcaraz dijo: “yo quisiera saber lo de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), cuánto dinero se va por estado, por ejemplo a Michoacán, vía agricultura por contrato, etcétera”, y Omar Lando Estañol planteó: “Hay programas estratégicos en el estado como la Cruzada del Maíz; me gustaría saber cómo se ejerce su presupuesto y además los problemas que existen en el ejercicio, porque en algunos grupos se ha detectado que el maíz que se subsidia a los productores es de mala calidad. Queremos saber quién hace la compra (de la semilla), cómo se licita y por qué (...) Nos gustaría también que se supiera a tiempo cuando hay subejercicios”.

Ignacio Martínez, por su parte, dijo: “quiero saber cómo se ejerce el presupuesto de la Federación a los estados, con base en qué les etiquetan o les programan los recursos, y en los programas donde se requiere un *pari passu*, qué tan obligado está el gobierno (local) o la dependencia de

poner ese *pari passu*. Y qué ocurre con lo que no se ejerce. Qué se tiene que hacer para que el próximo año lo que no se ejerce vuelva a llegar”.

Joel Saldívar dijo querer saber si dentro del presupuesto hay algún monto que atienda “necesidades que surjan en el momento. Por ejemplo, con nosotros ha surgido la necesidad de un programa de mejoramiento del suelo. Se ha hecho la solicitud al gobierno estatal, y nos dicen que no existe ese programa, y no nos han apoyado”. Posteriormente dijo también que quiere saber si hay evaluaciones de los programas para saber qué efectos están ejerciendo en los beneficiarios y en el campo mismo.



Diálogo en la mesa de discusión de Observatorio Campesino de Políticas Públicas

La dinámica de la discusión implicó que Ana Joaquina escribiera en cartulinas los elementos claves de las propuestas campesinas.

Ella indagó con los campesinos respecto de programas donde hay recursos compartidos del gobierno federal (en particular de la Sagarpa) y del gobierno del estado, como es el caso de Activos Productivos. Preguntó si hay claridad en cuanto al dinero que está en manos de la Sagarpa y el que está en manos del gobierno local.

Omar Lando señaló que no hay datos precisos: “A nosotros hace poco nos dijeron que el 30 por ciento del recurso para 2010 no se ha ejercido en el estado de Michoacán, o sea hay proyectos que ya están autorizados pero que no se les ha pagado (a los productores)”.

Olga Alcaraz precisó que el dinero del gobierno federal que llega a Michoacán viene en dos líneas: una que es el *pari passu*, el cual implica aportaciones de los gobiernos locales, y otra que es la “normal”, que recibe el gobierno del estado y lo aplica por su cuenta. Comentó que en 2010 ocurrió algo que el Cococam conoció hasta el último momento: “al gobierno del estado le correspondía poner 180 millones de pesos de *pari passu* para el Programa Estratégico de Apoyo a la cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol (Promaf) y no los puso. Por ello no tuvimos Promaf en 2008 y 2009 y se quedaron atorados unos 450 millones de pesos (de la aportación federal). El gobierno federal ya no dio ese dinero porque no puso su parte el gobierno del estado”.

Ratificó lo dicho por Omar Lando respecto de que hay gente que tiene proyectos aprobados, “tenemos el famoso contra-recibo y estamos haciendo fila en Tesorería para que nos den el dinero y no lo han podido dar. Dice Tesorería que no tienen ni para pagar a sus empleados. Y eso es de 2010. Por eso en 2011 no tienen dinero, porque vienen arrastrando un hoyo desde el 2010”.

Comentó que este 2011 el gobierno estatal “nos presionó como organización; nos dijeron: “mete tus proyectos de Activos Productivos en enero, febrero, marzo, porque queremos que todo el recurso de 2011 salga antes de la elecciones que son en mayo”, ya lo hicimos y estamos viendo que de los proyectos que estaban palomeados nos dicen no hay recurso”.

Dijo que eso es molesto para las organizaciones, y “como Cococam no vamos a permitirle al gobierno que mueva ese dinero”, porque las que cabildaron para fortalecer los presupuestos rurales de Michoacán fueron precisamente las organizaciones. “Allí estuvimos los de la ANEC en la Cámara de Diputados defendiendo dinero para Michoacán”.

Comentó también que hay otros programas, como Apoyos a la Comercialización, a los cuales les están recortando presupuesto. “¿Dónde está todo ese dinero?”

La preocupación constante del choque gobierno federal versus gobierno estatal y sobre la discrecionalidad emergía constantemente. Olga Alcaraz comentó:

Acaba de renunciar el tesorero del estado porque dice ya estaba hasta el gorro (cansado). El gobernador se toma como asunto personal todo... se traen una guerra entre (el presidente de la República) Felipe Calderón y (el gobernador) Leonel Godoy, y entre partidos. Dice el gobernador: “yo no les pido nada a esos cabrones”. ¿Se fijan cómo una persona decide? Él es una institución. Él está para jalar el recurso y ponerse a la par de todos. Él no presiona porque traen un pleito casado. Está peor la cosa. Los pleitos personales nos están afectando mucho.

Agustín Vázquez comentó que muchos municipios, incluido el de Senguio, donde su organización tiene influencia, reciben los recursos de *pari passu* (estatal y federal, pero deciden no ejercerlo o ejercer el recurso en rubros ajenos al campo).

A medida que se presentaban las inquietudes de los participantes de la mesa, Ana Joaquina fue haciendo propuestas de pasos primeros que podría dar el Observatorio: “Podríamos preguntar a la Federación qué pasa con Activos Productivos. ‘¿Se lo diste (el recurso) al estado o no?; ¿si el estado no pone su cuota, me lo puedes dar a mí?, y si el estado no pone su cuota y no me lo puedes dar, ¿qué va a pasar con ese recurso?, ¿por qué no lo pasas a otro rubro?’”.

Más allá de plantear la ruta para echar a andar al Observatorio Campesino, los participantes de la mesa, aprovecharon el espacio para hablar de una serie de problemas que podrían encontrar respuestas cuando el Observatorio madure. Por ejemplo, Omar Lando comentó:

Siempre hemos pugnado porque exista un programa de infraestructura para almacenamiento de granos (...) Al final de cuentas (el programa) se dio, pero quisiera ver

cómo poder medir los resultados, para hacer replanteamientos, incluso pari passus con programas federales porque el programa ofrece apoyos pequeños, unos 500 mil pesos, y si quieres una bodega no te alcanza. Una buena bodega cuesta tres millones de pesos. Querimos analizar esto y evaluarlo en el Observatorio.

Olga Alcaraz mencionó otro asunto que no relacionó directamente con el Observatorio, pero que representa un obstáculo estructural para que las organizaciones y los campesinos accedan a apoyos. Comentó que en los programas de Activos Productivos el campesino tiene que poner una proporción del valor del activo que desea adquirir. “Y te dicen que ya se aprobó tu proyecto, tienes que poner tu parte. Si no la pones en 15 días, te excluyen del programa. Muchas organizaciones no pudieron ejercer los apoyos que les aprobaron”.



Aspectos de la mesa de discusión sobre el Observatorio Campesino y Políticas Públicas

Ana Joaquina decidió hacer un corte de caja en este punto. Resaltó que hasta el momento un problema muy frecuentemente mencionado por los miembros de la mesa era el de la politización o cooptación de los recursos por ciertos grupos.

Pero consideró también que uno de los grandes problemas de las organizaciones es que carecen de información y lo que conocen se ha derivado más bien de suposiciones. Asimismo, dijo que no se había mencionado con precisión el asunto de las reglas de operación de los programas, que “de alguna manera van encaminadas hacia los productores que tienen ciertamente los mayores recursos”. Por ejemplo, en Activos Productivos se pide a los productores que tengan concretado su proyecto casi al cien por ciento para recibir los apoyos, lo cual evidencia que el programa no está dirigido a los productores de baja y mediana escalas.

Omar Lando sumó otro elemento que limita el acceso a los productores pequeños a las políticas públicas:

Se nos ha dicho que el financiamiento va dirigido a los más ricos, pero no lo podemos sustentar. En el distrito de Zamora hay organizaciones que han hecho solicitud de crédito y no se les ha autorizado. Sin embargo un cierto funcionario de FIRA me ha dicho “como estás chiquito, para mí no eres negocio. Ante ese tipo de acciones, ¿no hay manera de demandar?”

Otros participantes de la mesa comentaron que es muy evidente el mayor desarrollo en ciertas regiones de Michoacán, como Uruapan y Zamora, donde, dijeron, los gobiernos federal y estatal ha invertido durante diez o 20 años, y hay zonas, en contraste, que están totalmente olvidadas. La concentración de apoyos y políticas públicas sí se evidencia con el desarrollo desigual de las regiones.

Ana comentó que en la estrategia de incidencia de la REDCCAM tiene que establecerse cómo luchar contra la concentración. Y animó a los representantes campesinos a seguir definiendo la ruta del Observatorio. “Creo que si juntamos nuestros problemas y nuestras cosas que queremos saber, podríamos llegar a definir cómo hacemos para solucionar algunos de nuestros problemas en las cosas que queremos saber y tal vez eso nos pueda ayudar a tener una estrategia de incidencia mucho más efectiva en términos de política pública, aunque siempre enfrentándonos al problema de que no nos escuchen”.

Ivan Polanco tomó la palabra y dijo que la definición y metas del Observatorio las establecerían los miembros de la REDCCAM. “Con asesoría de nosotros, pero lo van a hacer ustedes”. Se trata de detonar un proceso que impulse las capacidades internas”.

Llamó a los participantes de la mesa a avanzar con calma. Consideró la idea de integrar en los primeros pasos del Observatorio programas de los ámbitos federal, estatal y municipal; reglas de operación de los programas (si bien es cierto que éstas son discutidas a nivel nacional).

Hay que ir viendo qué queremos aportar este año, dónde queremos atacar este año, ideas hay muchas y el Observatorio puede ser muy amplio, pero para ser eficaces hay que ir paso a paso y a avanzar paulatinamente.

Ana propuso establecer prioridades en la matriz del Observatorio, para avanzar de forma realista en ellas.

Creo que debemos pensar en los problemas que sí podemos resolver. Las cooptaciones no las vamos a resolver hoy ni mañana; los recursos escasos no los vamos a resolver nunca; en cuanto a la concentración, podemos incidir un poco en ella, y el que no tengamos información, podemos completamente incidir para obtener información, conocer y podemos ir definiendo, a partir de lo que sí podemos hacer, qué podemos hacer y cómo, para resolver algunos de estos problemas que plantean. Es un reto medio complicado.

Ana propuso pensar, discutir y llegar a acuerdos de “tres cosas que querrían saber” para que el Observatorio comience con ello, y lo que haya que obtener de información, “se subsanaría”.

Nuevamente surgió una lluvia de ideas de los participantes: dijeron “presupuesto”. “Sí, pero ¿de qué programas?”, preguntó Ana. Alguien más dijo. “podiera ser (el presupuesto de) sistemas de riego, de infraestructura, o los apoyos para la construcción de bordos”. Olga dijo “Apoyos a la Comercialización, pues este año nos vamos a enfrentar a un cambio en (el subprograma) Agricultura por Contrato: los productores tienen que aportar un 20 por ciento (para el pago de las primas de coberturas de precios) y los consumidores 30 por ciento, sin que sepamos quien decidió eso y con base en qué. Eso nos interesa evaluarlo porque estamos proponiendo al gobierno del estado conformar un fondo de coberturas.”

Se debatió sobre el programa Activos Productivos, en el sentido de que había que incorporarlo en el Observatorio en sus vertientes agrícola y pecuaria, pero también la de desarrollo rural considerando que el gobierno de Michoacán decidió este año eliminarla sin dar ninguna explicación. Ivan precisó que este programa es de responsabilidad estatal, pues el gobierno federal cumple en el momento que ingresa en un fideicomiso estatal los recursos que le corresponde aportar. Ante dudas respecto de qué ocurre si el gobierno del estado no pone su *pari passu* en este programa, Ivan aclaró que el dinero se queda en el fideicomiso y “puede ser que ahora se estén ejerciendo recursos de 2007, por ejemplo”. Olga Alcaraz comentó que el gobierno estatal a veces “finge” que ya puso su aportación en el fideicomiso y no es así, por lo cual es importante dar claridad a este programa.

Agustín Vázquez comentó que es importante que la Red vigile todos los programas estatales y federales, pues en ocasiones, cuando los productores acuden a las instancias del estado, éstas no dan a conocer la información de los programas existentes, o sólo la comunican a algunas personas; dan un trato selectivo. También es común que se informa sobre un cierto programa y al cuarto día ya se cerró su registro.

Ana Joaquina precisó que el objetivo del Observatorio es ese precisamente, dar seguimiento a los programas, pero en principio esta tarea se realizará de forma paulatina. Se irían integrando cada vez más programas, los que más interesen a la Red.

Finalmente, por propuesta de los representantes campesinos, se llegó al acuerdo de integrar al Observatorio Campesino los programas de Agricultura por Contrato, que es del ámbito federal; el de Activos Productivos en sus tres vertientes, agrícola, pecuaria y desarrollo rural, y los programas que aplican en el DDR de Morelia. La mecánica del Observatorio será que todos los miembros de la REDCCAM aporten la información a la que puedan tener acceso (en reuniones de los consejos de desarrollo rural municipal, estatal y federal; en sus encuentros con funcionarios públicos; en lo que vean o capten de presentaciones hechas en eventos públicos o privados por parte de quien conozca información sobre los presupuestos, etcétera). Olga Alcaraz consideró muy importante el integrar en este esfuerzo no sólo a la REDCCAM sino a todas las organizaciones que quieran participar, para así sumar el mayor número de aportantes de información posible. En lo que respecta a la Red, los dirigentes centrales y su equipo técnico se harán cargo de sistematizar la información con asesoría de Fundar y de ANEC, y se prevé que para octubre, noviembre de este año pueda haber ya algún resultado del Observatorio, de tal forma que pueda actuarse de manera preventiva ante el presupuesto rural de 2012, y no actuar de manera reactiva.

Se comentó que Fundar haría una primera solicitud de información vía el IFAI para conocer detalles de todos estos programas, y estará interactuando con la REDCAMM y con ANEC para definir los formatos de sistematización de la información, pero no hubo compromisos explícitos sobre los tiempos y formas para esta petición al IFAI.

Observaciones de Ana Joaquina Ruiz, sobre el arranque del Observatorio.

Para la elaboración de este reporte, en consulta en fechas posteriores a la reunión, Ana Joaquina Ruiz comentó que aún no se ha definido pertinentemente qué papel jugará cada organización. “Fundar puede transferir las capacidades para que REDCCAM, e incluso ANEC, monten el Observatorio. O se puede centralizar en la página de Subsidios (www.subsidiosalcampo.org.mx), con el trabajo de Fundar, pero no hay claridad en ello y creo que no se estableció esta claridad en el propio taller. Más aún, la transferencia de capacidades locales y la forma de montar la información son, en realidad, aspectos que no se tocaron”.

Explicó que está en proceso de establecer comunicación con Omar Lando Estaño, de la REDCCAM, para ver los pasos a seguir para realizar las solicitudes de información al IFAI.

Desde la perspectiva de Ana Joaquina, la construcción del Observatorio “desde abajo” es algo que no ha logrado cristalizarse pues los campesinos están aún en el proceso de concienciación y valoración de un instrumento como éste, y aún no tienen claridad absoluta sobre su utilidad. “Eso nos ha hecho repensar la metodología” de creación del Observatorio.

En el siguiente punto, que es la parte final de este reporte, se establecen conclusiones a partir de las visiones, consideraciones y perspectivas de los representantes de organizaciones socias de la REDCCAM.

3.- Consideraciones y conclusiones relativas a la forma como se ejercen las políticas públicas para el campo, a la capacidad de incidencia sobre éstas y el acceso a los subsidios por parte de los campesinos. Y consideraciones sobre la operación de un Observatorio Campesino de Políticas Públicas, ¿para qué sirve?

Para todos, propios y extraños, el gasto público destinado al campo, y los programas con que se opera son un asunto muy intrincado, difícil de entender: al hablar del tema saltan términos tales como *pari passu*; reglas de operación cambiantes cada año, fideicomisos no transparentes o la existencia de programas federales y estatales diferenciados, en algunos casos enlazados por una estrategia nacional, pero en otros no.

El tópico implica también programas “paraguas” como los Activos Productivos (antes Alianza Contigo y en sus orígenes Alianza para el Campo) con decenas de componentes, y además su diferenciación por rubro agrícola, pecuario y de desarrollo rural, y su ejecución con aportaciones de recursos de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como del propio productor.

Para un campesino promedio en México, más allá del Procampo —de aplicación generalizada, pagos por hectárea desvinculados de la producción y sin más requisito que la siembra— todo lo demás en materia de política pública es terreno vedado. Capítulo aparte sería hablar de los programas sociales, como Oportunidades, enfocados a combatir la pobreza.

Es cierto que, por ley (por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de diciembre de 2001), las organizaciones de agricultores cuentan desde hace una década con asientos en instancias municipales, estatales y federales para conocer la política pública rural y su desempeño, esto es los consejos de desarrollo rural sustentable presentes en los tres niveles, pero la realidad muestra que los campesinos en México no están organizados; la gran mayoría se conduce de manera individual, están dispersos, y hay muchos que pertenecen a organizaciones de perfil político o partidista, no a agrupaciones de corte económico. Ello, sin contar que es muy común observar entre los líderes campesinos corrupción o apatía; la mayoría no se interesa en participar en los consejos de desarrollo rural, o si lo hacen, no dan seguimiento a lo que allí se discute y mucho menos lo comunican a sus agremiados. Al mismo tiempo se sabe de manera informal de negociaciones poco claras de tales líderes con la autoridad para obtener provechos ilegítimos personales o de grupo.

En este marco, hablar de la REDCCAM y de sus primeras deliberaciones para establecer un Observatorio Campesino de Políticas Públicas, aparece como un asunto de vanguardia, incluso para los dirigentes de las organizaciones miembros de la Red.

Construir tal observatorio, como una primera experiencia campesina en búsqueda de información precisa sobre los presupuestos públicos para el agro (sus montos reales en principio); sobre el

origen de los recursos y cómo están etiquetados; sobre las fórmulas que utilizan las autoridades para asignar los apoyos públicos; sobre los recursos que se integran a fideicomisos estatales que no son transparentes y que en teoría pueden ejercerse en años posteriores a su autorización presupuestaria; sobre los ritmos y el cumplimiento de la autoridad federal en la entrega de recursos al nivel estatal en los programas que así procede; e incluso sobre el efecto que los programas tienen para elevar la producción y la productividad y para mejorar el bienestar de los campesinos, resulta novedoso y en principio genera expectativas en algunos y escepticismo en otros.

El diálogo sobre el Observatorio Campesino, realizado por miembros de la REDCCAM durante su Asamblea Estatal del 8 y 9 de junio en un hotel a las afueras de la ciudad de Uruapan --con la guía de Ivan Polanco, director de Políticas Públicas de la ANEC, y de Miguel Pulido y Ana Joaquina Ruiz, de Fundar-Centro de Investigación y Análisis-- sirvió para que tomaran conciencia de la utilidad y fuerza política que puede tener un instrumento de esta índole no sólo para acceder a la información pública de los programas para el campo sino para, en un segundo paso, buscar la incidencia en las decisiones sobre las políticas y los programas rurales.

Sirvió también para que ellos mismos observaran que, respecto del conjunto de la población campesina de México, la Red y la ANEC son agrupaciones de avanzada, con capacidades, conocimientos y habilidades organizativas poco comunes, lo cual los convierte en los conglomerados propicios para llevar adelante y con éxito la iniciativa del Observatorio.

Todo ello ocurrió a partir de escuchar y escucharse a sí mismos con relatos de sus experiencias personales y de grupo sobre las gestiones frustradas que realizan para acceder a los recursos de los programas para el campo; sobre las trampas que los propios programas implican --por ejemplo el requisito de que los campesinos realicen sus aportaciones de capital para sus proyectos antes de recibir los apoyos--; sobre la falta de pertinencia de programas que han sido definidos y decididos en las esferas gubernamentales sin consulta campesina --como es el caso de la Cruzada del Maíz que desarrolla Michoacán desde hace dos años--, y sobre la visión generalizada de que los productores y las organizaciones carecen de información fundamental y que se dejan llevar por suposiciones respecto de los programas y los presupuestos.

Enseguida este reporte ilustrará tales consideraciones y otras con comentarios de los participantes de la discusión sobre el Observatorio Campesino obtenidos en entrevistas individuales y/o escuchados en la propia deliberación.

Resulta apabullante y generalizada la idea de que los programas rurales, federales, estatales o municipales carecen de pertinencia, o de plano pervierten la dinámica de la vida campesina. Y en el mismo nivel de contundencia y coincidencia está la idea de que los recursos para el campo se concentran en muy pocas manos y que incluso las reglas de operación de programas específicos que tienden a la capitalización o a subsidiar la comercialización de granos están hechas con un sesgo tal que excluyen a los productores de pequeña y mediana escalas y que además los colocan en desventaja respecto de los compradores-procesadores de granos básicos.

De esta forma, se ratifica desde una visión local la afirmación que escuchamos de académicos y expertos en políticas públicas e incluso de instituciones como el Banco Mundial, de que el presupuesto rural en México, de casi 300 mil millones de pesos en 2011, es muy alto (en su comparación con Latinoamérica y en su relación con el Producto Interno Bruto sectorial) y sin embargo son pobres sus efectos productivos y de bienestar de los campesinos.

Y no sólo eso, los representantes campesinos de la Red aquí entrevistados dan cuenta de los efectos sociales depresivos que están ocurriendo debido a la falta de un presupuesto público equitativo, decidido en conjunto con los campesinos y bien ejercido.

La intención de la REDCCAM de implementar un Observatorio Campesino de Políticas Públicas surge de la búsqueda por incidir en los programas dirigidos a los productores agrícolas, en especial lo relativo a la comercialización de granos. Omar Lando Estañol, gerente de esta Red de 18 agrupaciones explica:

Tenemos muchos problemas, que no podemos controlar. Uno de ellos es el mercado, y las políticas, como lo hemos dicho siempre, benefician al consumidor, y el productor pues ahí como nos trate el consumidor es como actuamos. Por ejemplo, en cierta ocasión, en la venta de trigo los molineros no le quisieron entrar porque el precio estaba alto. Nosotros buscamos siempre un precio favorable, y al momento de querer entablar una negociación con el molino, no nos contestan, o nos dicen de plano que no va a contratar. La acción más inmediata que hicimos fue ir a ANEC y pedir una reunión con Aserca. En Aserca nos dijeron que hablarían con los molineros para que contrataran nuestro trigo, pero ya para entonces los precios habían caído. Entonces debemos incidir en la política pública para lograr un esquema que favorezca al productor, porque estamos en la incertidumbre: ¿le van a entrar o no le van a entrar los molineros? Y nuestra propuesta es que el productor pueda contratar su cobertura, incluso antes de que siembre para que también le demos la oportunidad de elegir, si siembra sorgo, si siembra maíz dependiendo las condiciones del mercado. Así, eso permitiría al productor ver con tranquilidad si el comprador le entra o no, pues de cualquier manera tendrá él su cobertura, se protegerá de vaivenes del mercado.



Omar Lando Estañol, gerente de la REDCCAM

La REDCCAM ya de hecho ha dado pasos para incidir en la política pública; en ese caminar se han topado con obstáculos, algunos endógenos –como la resistencia de los campesinos a movilizarse, pues ello les implica gastos y pérdida de su jornada laboral— y otros exógenos, como la politización de instancias de negociación. Y en ese caminar también la Red se ha dado cuenta de la necesidad de contar con información confiable. Prosigue Omar Lando:

Por la problemática que atravesamos en la comercialización de granos, como REDCCAM, con mil 930 socios, nos hemos abocado a incidir en política pública, y muchas veces lo hemos planteado por medio de la ANEC; antes ese era nuestro único canal. Después empezamos a explorar otros mecanismos: nos hicimos integrantes del comité Sistema-Producto Maíz, pero éste se politizó. Posteriormente nos integramos al Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable pero no llevamos un sustento, simplemente nos basábamos en una problemática sentida de nosotros pero sin sustento con datos para poder nosotros defendernos de mejor manera. También hemos usado el mecanismo de movilización, pero tenemos la debilidad de que los productores no participan, en muchos de los casos hay algunas organizaciones en que incluso se les tiene que pagar el día a los productores porque de hecho trabajan como jornal, y es una pérdida para ellos que la resienten mucho; en ciertas ocasiones las organizaciones tienen que pagarles.

Julio Manuel Valdez Alcántar, responsable del área de comercialización de la REDCCAM y asesor también en finanzas y gobernabilidad de los socios de la Red, destaca la importancia de esta Red y de la ANEC en general, por su perfil económico --a diferencia de la mayoría de organizaciones campesinas, que, dice, son de corte social--; porque tienen la capacidad de generar proyectos que mejoran la productividad, con análisis de suelos y paquetes tecnológicos, y porque realizan estrategias tales como la consolidación de compra de insumos que mejoran su competitividad.

Esto, sin embargo, les genera perjuicio en su relación con los compradores de granos, que buscan anularlos para evitar cualquier mínima competencia en la comercialización. Y ello preocupa pues esos mismos compradores son los que por otro lado se ven beneficiados de manera muy deliberada por los programas públicos para el agro y además cuentan con armas, tales como la importación libre de granos, con la cual pueden derrumbar los precios internos al productor.

Nos tienen identificados. A nivel nacional la única organización que les hace peso (a los compradores de granos) es ANEC, no hay más. Hay muchas organizaciones, pero afortunada o desafortunadamente, la mayoría no tienen una actividad productiva, no tienen una actividad económica; son organización que agrupa gente que exige al gobierno, pero la mayoría no ejerce como empresa. Así, los consumidores dicen “yo estoy pagando afuera a dos mil 700 la toneladas (de maíz) pero como tú eres de ANEC, te pago dos mil 400 si quieres, y si no, no te compro. Y ya con una presión de créditos y más terminamos vendiendo”.

(...) Tenemos un sector consumidor bastante organizado, muy monopolizado, y su influencia en políticas públicas es determinante. Cuando Aserca determina las bases que va a aplicar en el esquema de agricultura por contrato, los llama a ellos y no a nosotros.

Entonces terminamos entrando en el juego que ellos quieren, salvo un año, 2007, cuando logramos consolidar todo el volumen de maíz de varias organizaciones de ANEC de la región Bajío, esto es Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y coincidió coyunturalmente con el incremento de los precios internacionales y el boom de los agroquímicos. Entonces pudimos presionar al sector consumidor para mejorar las condiciones: estábamos hablando de precios de mil 700 pesos por tonelada y llegamos a precios de dos mil 300. Después, en 2008, quisimos hacer lo mismo, pero los consumidores importaron, nos quedamos con el grano y además sufrimos pérdidas. Allí aprendimos que de esa forma no podemos con los consumidores.

Esto no es exclusivo de nuestro estado, sino de todo el país. Los consumidores son pocos. Hay muchos comercializadores pero al final de cuentas los consumidores son pocos, los más importantes: Maseca, Cargill, Minsa... ellos abastecen a todos molineros nixtamaleros del Distrito Federal y de todas las grandes ciudades del país; para competir con ellos, estás en una situación totalmente desigual. Ellos tienen espuelas de ferrocarril, tienen compra de fletes por anticipado, tienen muchas condiciones que los ponen en una situación de mucha ventaja frente a nosotros; los coyotes, los intermediarios, los comercializadores terminan sirviéndoles a ellos y ellos ejercen todo el poder sobre el mercado. Lo tenemos muy claro. Incluso pequeños consumidores: una pequeña planta de alimentos, unos ganaderos, etcétera, si Maseca no da precio, ellos no dan precio; hasta que Maseca dice voy a pagar a tanto, ellos salen a comprar a ese precio.



Julio Manuel Valdez, responsable de Comercialización de la REDCCAM

María Isabel Ruiz, presidenta del Grupo Glalcaixt, de seis productoras de jitomate de invernadero en Ixtlán de los Hervores, comenta que a este municipio pertenecen 125 ejidatarios, y en su generalidad no tienen acceso a los programas públicos por una sencilla razón: desconocen cuáles existen, y por supuesto los procedimientos para acceder a ellos, a pesar de que son campesinos pobres, de muy pequeña escala –con tres o cuatro hectáreas la mayoría--, que requieren un apoyo de la sociedad. Ocurre que los comisariados ejidales acuden a las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), pero no transmiten a los campesinos lo que se genera en esas juntas.

A veces se quejan: “sólo María Isabel recibe beneficios”. Y ellos (los comisariados) les contestan: “es que ella sí se mueve, ella saca los programas”. Yo les digo a los comisariados: “ustedes son los que tienen que informarles a los compañeros: ‘señores, hay este programa, hay este otro, a quién le puede servir esto. Miren los programas son así o así, aquí los podemos apoyar haciéndoles la papelería’, o qué se yo”. En el comité del Consejo llega la Sagarpa o la Secretaría de Desarrollo Rural del estado (Sedru) y nos informa: hay este y este programa, el diesel va a llegar así, el Procampo va a llegar en tal fecha, etcétera, ahí se nos informa todo y ya de ahí todos los comisariados ejidales llevan la información. ¿Qué pasa? Cuando llegan a sus ejidos dan la mitad de la información y sólo lo que les conviene. ¿Por qué? Por apatía.



María Isabel Ruiz Parra, directora del Grupo Galcaixt

María Isabel fue elegida junto con otras tres personas dentro del CMDR para palomear las solicitudes de apoyo este año para programas de infraestructura, tractores, bombas agrícolas y otros. Pero aun así, reconoce que ella misma ignora detalles de la información.

¿De qué institución vienen los recursos? No sé, puede ser de Sedru... no estoy enterada, se me pasó preguntar. Porque decimos: viene de Morelia, de la presidencia, pero ¿de qué institución, de que área nos está llegando el dinero?, no sé.

De acuerdo con Omar Lando, en general los productores desconocen la mecánica para acceder a recursos públicos etiquetados para el campo. Y en el caso de aquellos que sí conocen la mecánica (en este caso socios de la Red), resulta que es frecuente encontrar piedras en el camino.

De antemano el productor tiene un desconocimiento de que existe el programa. Cómo se tramita, en qué ventanilla, cuándo se abre, cuándo se cierra, todo eso desconoce el productor. Ya es cuando sale en el periódico publicado que se va enterando de las cosas; además (cuando sí tiene acceso a los programas) al productor le piden un proyecto muchas de las veces; si encuentra un técnico, mete el trámite, ya de ahí tiene su folio. Y no sé por qué muchos productores que conozco de repente llegan conmigo y me dicen que no salió su proyecto, yo investigo qué pasó con su folio y me dicen que el expediente no llegó, o un montón de cosas que supuestamente están estipuladas en las reglas (de operación) y que él no era sujeto del apoyo.

Ignacio Martínez, presidente de la organización Ignacio López Rayón, ejido Aguacaliente, comenta que el hecho de que estén organizados como REDCCAM permite a los socios tener una asesoría técnica en todos los ámbitos: “financiero, con proyectistas, contadores y demás” y por tanto “sí tenemos claro el panorama y sabemos hacer una planeación para proyectar a qué esquema (de apoyos públicos) podemos acceder y preguntar en cualquier dependencia de gobierno”. Pero a la vez, de forma paradójica, esta capacidad de los socios de la Red les impone obstáculos.

En realidad, productores organizados (en el estado) somos un 10 por ciento (...) Nosotros ya somos una organización económica que nos permite con mayor facilidad hacer una planeación-proyección y adquisición de lo que nosotros necesitamos, a diferencia de un productor que no está organizado. De cualquier forma, estamos bien identificados y el gobierno nos pone ciertas condiciones o trabas. Nos dicen: “espérate, vamos a atender a los productores” (que tramitan individualmente sus apoyos), porque, por el hecho de que estamos organizados, accedemos más fácilmente y tenemos capital humano y económico para acceder.

El problema es que nuestros proyectos son de mayor impacto y requieren mayor inversión; entonces nuestra participación económica es mayor. Un proyecto de nosotros tiene que poner el 50 por ciento y el gobierno el otro 50, y entonces esa parte es la que se nos complica a veces a nosotros, porque no la tenemos sustentada con un crédito, no es fácil de poder acceder a un crédito. Decir a los productores: “la fecha límite para la aportación es tal día” y recabar ese recurso es algo complicado.



Ignacio Martínez, presidente de la organización Ignacio López Rayón, ejido Aguacaliente

Sobre la idea de que las organizaciones y los productores carecen de información y por tanto son susceptibles de caer en trampas, de que les escamoteen los recursos que están dispuestos para apoyar al campo, el relato de Olga Alcaraz, de Agricultores Unidos Región Guayangareo es muy ilustrativo. Y de su relato se desprende algo que ella defendió mucho en la mesa de diálogo sobre el Observatorio Campesino: que en la experiencia se involucre no sólo a los miembros de la Red, sino a todas las organizaciones que sea posible, pues así, mientras mayor sea el número de personas que participen, la información compartida será mayor y con más cobertura.

Llevo dos años en la Red y en ANEC, pero también tengo dos años en el Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas del estado de Michoacán (Cococam). Esta inquietud de querer cambiar un poco la política pública nace cuando nosotros como excedentarios –

porque estamos en una zona de dos ciclos-- íbamos a pedir apoyos al gobierno estatal, ignorábamos de dónde venía el recurso. Simplemente sabíamos que había dinero y se habían abierto los programas, y lo escuchábamos en la radio o en campañas inclusive del gobierno. Entonces cuando íbamos y decíamos “traigo un proyecto de construcción de un camino de acceso a mi organización”. Presentábamos el proyecto y nos decían “ven en un mes”. Pasaba el tiempo y nos decían: “No, ya no hay dinero. Y ¿por qué ya no hay dinero?, porque se lo asignamos a los productores de las regiones de autoconsumo, los pobrecitos de autoconsumo de la zona purépecha, que ya sabes que hay que estarles dando”. Y a los de autoconsumo les decían: “no, es que se lo llevaron los excedentarios”. Entonces es interesante esto porque al momento de juntarnos todos (en la Cococam), pues dijimos “aquí están los de autoconsumo y allá en la zona purépecha no has dado ni un cinco, y aquí en excedentarios no has dado más que tanto. ¿Dónde está el dinero? Este ejercicio se me hace interesante.



Olga Alcaraz, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo

Y es que, de acuerdo con la percepción de los representantes campesinos de la Red, hay en las autoridades gubernamentales un menosprecio hacia el campo; y existe en el estado una gran discrecionalidad en la aplicación de los recursos, marcada mucho por intereses políticos, no obstante que los productores participen y busquen incidir en las instancias definidas para ello. En los municipios hay una preferencia por invertir el dinero en obras urbanas que sean “visibles” para que tengan una recompensa en términos políticos para el partido en el poder, y el campo se queda marginado.

Agustín Vázquez Galán, presidente de Productores del Cerro de La Cruz (ubicado en la zona oriente de la mariposa monarca), lo explica así:

Estoy en el Consejo Municipal, distrital (de Desarrollo Rural) y me tocó la suerte de ser el que represente al distrito ante el Consejo estatal. A nuestro distrito lo componen 16 municipios en la zona oriente, entonces para nosotros sí tratamos de incidir, pero ya en el nivel estatal es muy difícil porque en este momento que vive Michoacán de elecciones, pues es muy difícil porque todo va de acorde a sus proyectos que tienen los mismos gobiernos.

Yo creo que sí tenemos claro (cómo operan los programas para el campo); sí entendemos. En el municipio, por ejemplo, para que el presidente pueda meternos algo para los apoyos

del campo en el Consejo, se presenta, se cabildea, lo autoriza, y determina una equis cantidad acorde a lo que le quieran dar, pero son muy pocos los municipios que sí impulsan el campo. Hablo de la zona oriente del estado. Hay muchos que tienen la visión de decir: “si doy 500 mil pesos para apoyar al campo, no me genera una ganancia; entonces es más fácil invertirlos en banquetas, en cemento”, en lo sea, en algo que sí les deje (políticamente). Eso es lo triste en muchos consejos municipales que los presidentes no le meten un peso al campo (...) En Activos Productivos se hace una partida entre gobierno estatal, federal y municipal; lamentablemente algunos municipios al final no participan; al principio dicen que sí le van a entrar (con sus aportaciones, con su pari passu) y al final san se acabó, ya no hubo dinero. No hacen su aportación.



Agustín Vázquez Galán, presidente de Productores del Cerro de La Cruz

Abunda Joel Saldívar, representante legal de Temascales los Huizachales:

La Secretaría de Agricultura (federal) y la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru, estatal) tienen enfrentamientos sobre quien hace los repartos, quien es el que rige y quien es el que reparte. En lugar de que se junten para ver cómo van a beneficiar más, no ellos están viendo quién puede cacaraquear el huevo.



Joel Saldívar, representante legal de Temascales los Huizachales

Ante todos estos testimonios, surge una duda: cuando las organizaciones y/o los productores logran acceder a recursos de programas de apoyo públicos, qué tan benéficos les resultan. ¿Hay un efecto real, continuo, en favor de la productividad, del bienestar de la familia campesina, de la comunidad? ¿Los programas disponibles son pertinentes, son los adecuados? Ignacio Martínez lo explica:

Además del Procampo, que es algo ya establecido, a los únicos programas que podemos acceder son los de Activos Productivos (antes llamado Alianza Contigo y Alianza para el Campo), pero haya que hay que cumplir una serie de requisitos, hay que proyectar o planear y hacer otras actividades como ir a buscar un despacho, como ir a pagar (la parte que corresponde poner al productor) antes de obtener el apoyo y no hay ninguna certeza de que el proyecto sea aprobado.

Además, como van cambiando año con año las reglas de operación, los esquemas de estos programas se nos hace más difícil; cada año nos las pasamos aprendiendo los cambios.

La Alianza para el Campo traía cien componentes; está difícil saber a cuál tirarle. Ahora, nosotros no sabemos qué componente tiene mayores recursos. Como no es fácil de poder acceder al programa.

Entonces nosotros nos vamos a donde haya más oportunidad de tener un apoyo, pero no a donde tenemos potencial productivo, es decir, si hay apoyo para un tractor pues nos vamos para el tractor, pero esa no es nuestra vocación, nuestra vocación es tener animales ahí en el campo.

Y como en todos los programas (componentes de Activos Productivos) primero el productor tiene que invertirlo, o sea darle al programa el recurso que no tenemos, ¿qué hacemos?, vamos a conseguirlo, ¿con quién?, con un agiotista, una institución financiera o una agencia. Y entonces primero comprobamos la adquisición de lo que nosotros estamos solicitando, y después nos dan eso como un reintegro. Ya no fue apoyo, ya fue un reintegro.

Por ejemplo, para la adquisición de un tractor dan unos 100 mil pesos, pero el tractor cuesta 400 mil pesos, hay que invertir nosotros los campesinos productores 300 mil pesos, entonces ese negocio no es rentable en ningún sentido. El campesino se tiene que endeudar y a la vuelta de un año o dos se lo está recogiendo la agencia (el tractor) o bien termina vendiendo las tierras para pagar el tractor.

El propio Ignacio Martínez considera que el Procampo –libre de condicionamientos, con certidumbre, con una cuota por hectárea--, es el programa que mejor les sirve en términos productivos a los miembros de su asociación, quienes en promedio tienen predios de seis hectáreas y media (una y media de riego, dos y media de punta de riego y dos y media de temporal) y siembran sobre todo maíz, luego trigo y por último avena forrajera para engorda de ganado.

Lo único más bueno es el Procampo, porque tiene etiquetado el recurso, ya sabe el productor cuánto va a recibir, con base en eso ya sabe hacer su planeación. El productor está esperando que llegue el Procampo para poder comprar su fertilizante, o en su defecto

se está echando el compromiso de conseguir el fertilizante o un recurso para comprar el fertilizante mientras que llega el Procampo.

Con mejores programas, los productores de su organización, la Ignacio López Rayón, podrían elevar su productividad.

Cuando no teníamos la asesoría técnica o no estábamos organizados, teníamos un rendimiento de tres toneladas por hectárea en promedio. Actualmente el potencial es de seis toneladas debido a la densidad de población que ha aumentado, por la nueva tecnología o el paquete tecnológico, por la asesoría que hemos contratado.

Hay también programas incompletos, como lo relata María Isabel Ruiz:

Los programas disponibles para sanidad, de la Sagarpa, son incompletos. Llega el ingeniero y dice: se está atacando a las ratas, se está atacando esto y aquello, pero otros insectos no pueden porque no hay capital, ni manera de poderlo aventar ya sea por medio de bombas, ya sea en auto o en avioneta que sería lo más viable. Ahorita todos los freseros de (municipio de) Zamora ya no cosecharon; les bajó mucho la producción por todas esas plagas que les llegan, ahora los atacó la araña, debido a que hubo mucha sequedad y por los cambios que estamos teniendo en el ambiente.

La falta de pertinencia también se observa en la Cruzada del Maíz, programa establecido por el actual gobierno desde hace dos años, con el objetivo de hacer frente a la vulnerabilidad en la oferta internacional del maíz, derivada del uso de este grano para producir agrocombustibles (etanol). Este programa, mencionado también en la mesa de discusión de la Asamblea de la REDCCAM, se determinó sin considerar las opiniones de los productores y los efectos resultan contraproducentes, dice Omar Lando:

En la Cruzada del Maíz, al productor se le otorga un subsidio por medio de la semilla; se le dan biofertilizantes y asistencia técnica gratuita, y a los que producen maíces criollos les dan 200 pesos por hectárea. Yo siento que no atiende las necesidades reales de los productores y es discrecional.

Nosotros le decíamos al gobierno del estado: “oye, el productor sí requiere la semilla, pero tal semilla, porque es la que le ha funcionado, no ha probado otra y tú me estás mandando otra”, y en ese sentido el productor, como está barata, la compra pero llegamos al resultado de que no cosecha nada.

Por otro lado, dijimos que el programa debía ser más integral, considerando el esquema de alto rendimiento que estamos llevando con ANEC, que el productor tuviera apoyo para el análisis de suelo, para mejoradores de suelo, semilla, biofertilizante. En la Cruzada el apoyo con el biofertilizante ha sido muy superficial porque no te enseñan cómo usarlo; dieron las micorrizas (hongos benéficos) que se tenían que aplicar a las semillas, y luego los productores empezaron a tener problemas porque se atoraban en la sembradora. No se contó con la asistencia técnica para que ellos pudieran aprovechar eso. Nunca hicieron

caso a nuestras opiniones, y parte de ello es por la falta de información. Necesitamos información para poder incidir.

La política social, para confrontar la pobreza –con presupuestos etiquetados en el rubro rural-- tiene implicaciones en el agro; en opinión de los entrevistados de la REDCCAM, son negativas e incluso perversas. Oportunidades (antes llamado Progresá), que es el programa fundamental antipobreza, con recursos públicos que se duplicaron entre 2006-11 y con una amplia cobertura de familias rurales, es algo que debe entrar en la evaluación y ajuste de las políticas para el campo, dicen. Julio Manuel Valdez señala:

Hay personas que nos comentan que desde que existe Oportunidades ¿quién quiere trabajar? Alguien que tiene dos o tres hectáreas, dice '¿para qué las siembro si con Oportunidades tengo? Entonces cuando al agricultor--ya desmotivado porque su actividad no es apreciada y porque su producto es barato, con insumos caros y además difícil de comercializar-- le empieza a llegar un recurso de manera bimestral, pues dice ¿para qué siembro?, ¿para qué me meto en problemas?, ¿para qué me expongo a perder mi dinero ahí? No es de todos, pero sí se empieza a dar mucho.

Personas que antes se dedicaban a trabajar su parcela y que se complementaban trabajando con otra persona están dejándolo de hacer, porque ya no tienen la necesidad.

Agustín Vázquez redunda:

En este momento el campo necesita un apoyo más que nada, créditos baratos, accesibles, y que el gobierno deje de pensar en programas sociales que en nada han beneficiado. La gente del campo ya nada más está esperando que llegue el apoyo asistencial de Oportunidades, y eso nos está llevando a la renta, porque se ha vuelto comodino vivir así. El gobierno debería de pensar que lejos de estar ayudando a esas familias, las está haciendo flojas, es un paternalismo mal encaminado. Hay municipios que reciben en Oportunidades cuatro o cinco millones de pesos cada dos meses, y la gente malgasta ese dinero. Los días de entrega del programa los pueblos enteros se vuelven tianguis, y hay una gran venta de baratijas y comida chatarra. Si esos recursos se tradujeran en empleo, que no fueran dadas de estirar la mano, no habría una sola tierra sin sembrar. Todos tendrían fertilizante.

Los representantes de la REDCCAM entrevistados son muy contundentes al señalar que la insuficiencia de programas públicos propicios para el agro y la incapacidad para acceder a subsidios –lo cual implícitamente considera la falta de incidencia de las organizaciones para su ajuste, cambio o mejora– tienen efectos nocivos claros en el campo. El rentismo, la emigración, el envejecimiento de la población, la insuficiente inversión y atención a la producción son fenómenos directamente enlazados a esta situación. Algunos lamentan todavía el desmantelamiento de instituciones del campo que ocurrió en los años 80s y 90s del siglo pasado.

Joel Saldívar dice que en su región—los municipios de Contepec y Epitacio Huerta-- hay unos 300 productores de maíz que trabajan unas mil 500 hectáreas y que son de pequeña escala, “el que

más tiene, cuenta con diez hectáreas”. La mayoría de estas personas tiene más de 50 años de edad.

Hay mucha renta de tierra y hay algunas tierras ociosas, pues la gente no tiene los recursos para trabajar, ni la tecnología, ni el asesoramiento. Antes tampoco tenía eso pero había menos costos, considero. Había más rentabilidad. Contábamos con el seguro de Agroasemex; antes de que desapareciera Banrural, unos sembrábamos, desapareció Banrural y ya no pudimos seguir sembrando.

La política pública de hoy, dice, no sirve para apoyar al productor en lo que requiere.

Imagínese, si yo siembro una parcela y tengo para las semillas, me falta el fertilizante, me falta quien me diga cómo debo de sembrar, faltan los análisis de suelo y falta con qué pagar el seguro. Entonces lo que estoy haciendo es un gasto, en lugar de garantizar un ingreso. Generalmente no se regresa la inversión que hice porque me faltan muchas herramientas para ser rentable. Y esto ocurre desde que desapareció el Banrural. A lo mejor hubo malos manejos en Banrural, lo que debió hacerse fue cambiar algunas reglas pero no dejarnos desprotegidos.

María Isabel Ruiz habla también de los efectos socioeconómicos de la falta de efectividad o ausencia de programas para el campo en su región, en el municipio de Ixtlán de los Hervores.

La nuestra es una comunidad que se sostiene únicamente de la agricultura, no hay fábricas, no hay nada, es un lugar pobre, rural, todas las familias dependen del campo. Si hay buenas cosechas se resiente en el pueblo inmediatamente porque las señoras compran esto y aquello, hay dinero. Pero si no hay buena cosecha, o no hay quien siembre, ahí se perdió, ahí no hay movimiento. Somos 125 ejidatarios, la mayoría no cuenta con capital para sembrar su parcela de cuatro hectáreas. Y no hay un recurso donde nos digan “tengan, y nos liquidan cuando cosechen”. No hay esa garantía que podría servir para que el ejidatario se levantara poco a poco. No hay acceso a los programas públicos. Repito: la gente los desconoce.

La mayoría de los productores son mayores. Hay muchas viudas que no trabajan la tierra, la rentan, porque nunca la trabajaron, nunca se atrevieron, nunca hubo ese conocimiento ni esas ganas de aprender, de aventarse a sembrar, pues eso también es la apatía. Hay gente que emigró y dejó a la mujer sola: “me voy a Estados Unidos, tú quédate, recibes la rentita (de la tierra) y el Procampo”.

Agustín Vázquez comenta al respecto:

Nosotros componemos nuestra sociedad de producción rural (SPR) con gente de Maravatío y Senguio. Somos 45 socios productores de maíz y trigo. La mayoría somos gente mayor, por eso estamos impulsando a las mujeres y a los jóvenes a que hagan las tareas que ya no podemos hacer nosotros (...). Sí se está llevando a cabo la venta, la renta de tierras, porque en muchas ocasiones los productores de bajos recursos no tienen recursos y no tienen una

garantía para sacar un crédito, entonces para ellos es más fácil rentar o vender la tierra porque no se tiene la capacidad económica para hacerla producir. Dentro de nuestra organización hay gente que tiene 77 u 80 años de edad, pero la edad no limita a la gente a sembrar, lo que la ha limitado es la falta de apoyos para un crédito barato.

Ignacio Martínez comentó en este punto:

En la organización Ignacio López Rayón somos ejidatarios. Los fundadores fuimos 24 productores; ahora damos atención a 98 productores que son comerciales, pero asimismo brindamos atención a toda la región en su conjunto, hombres, mujeres que tienen las características de campo, de ser ejidatarios, hijos de ejidatarios.

La región se caracteriza porque se renta la tierra; entonces hay hijos de ejidatarios que no tienen tierra pero la rentan a los campesinos de mayor de edad y no tiene con qué trabajar.

Otros hijos de ejidatarios tienen un perfil académico, con más estudio; ellos tratan de salir a la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Toluca, a trabajar; y los jóvenes que no tienen ninguna preparación de estudio ni rentan tierra lo que hacen es emigrar hacia Estados Unidos. Estos migrantes representan un 30 por ciento de los jóvenes de la región, y es preocupante su situación porque no tienen con qué producir y no hay empleo en la región.

Los representantes campesinos citados coinciden en que obstáculos de acceso, ineficiencias, escamoteo, concentración de recursos en pocas manos y demás problemas que plantea la política pública para el campo y sus programas no se resolverán con la iniciativa a que se refiere centralmente este reporte, el Observatorio Campesino de Políticas Públicas.

Sin embargo, la organización campesina en torno a la información; el tener en las manos un instrumento de información sistematizada, y que las organizaciones y los productores – contribuyentes todos en la integración de tal información— puedan establecer un diálogo o una negociación con las autoridades con base en argumentos firmes obtenidos gracias a la información, serán un paso muy importante para lograr incidencia en las políticas públicas por medio de propiciar reflexiones sobre su pertinencia y sus efectos; de hacer públicas las prácticas inadecuadas, politizadas y corruptas con que se ejerce el presupuesto; y de generar claridad en la información del gobierno sobre los rubros presupuestarios federales, estatales y municipales, su composición y su disponibilidad, entre otras cosas. Y es que algo que está claro es que contar con información dota de poder político, un poder que, es urgente, esté en manos campesinas.

La información sistematizada puede servir para varios propósitos. De acuerdo con Julio Manuel Valdez, permitiría establecer un contrapeso a la industria consumidora de granos altamente concentrada, a sus monopolios.

Creo que todo parte de la organización; la principal fortaleza de los consumidores está en la desorganización de la gente. Debemos unirnos y ponernos de acuerdo. El gobierno nos

puede decir a dos o tres que no, pero no creo que nos pueda decir a mil o a dos mil, o a todo un estado que no.

Las organizaciones de ANEC han logrado un acercamiento con la autoridad: podemos tener una reunión con el secretario de Agricultura, con el director de Aserca, pero si nos siguen viendo como un pequeño grupo, pues lógicamente no tenemos gran peso; realmente nos hacen caso cuando hay la amenaza de que vamos a tomar las oficinas, de otra manera no. Creo que (para lograr avances) sí va por ahí (establecer el Observatorio Campesino). Si no tenemos información, estamos ante un desconocimiento; en nuestro sector gran parte de las cosas se generan a partir del desconocimiento. Entonces, según lo que entendí (en la mesa de diálogo) sobre el Observatorio de Políticas es precisamente juntar evidencias, información de cómo está haciendo la cosas el gobierno y además transmitir las y que todo el mundo las esté conociendo. Creo que es un punto de partida importante el conocerlas, porque si no, nos la pasamos especulando.

Para Olga Alcaraz, el participar en organizaciones, el capacitarse, el realizar actividades que resultan complicadas o que gastan tiempo –como las reuniones internas y el acercamiento con autoridades--, aunado al acceso a la información, resulta clave para madurar como campesinos. Pero esto implica el compromiso también de generar transparencia dentro de las propias organizaciones.

A mí me queda claro que si no participamos, no nos organizamos, no nos coordinamos como organizaciones campesinas, pues estamos retrasados, ¿no?

Antes el conocimiento no se repartía. Eso es lo que tenemos que hacer, que el conocimiento se reparta, que la información fluya. Entonces (el participar en el Cococam y en la REDCCAM) ha sido muy interesante, porque precisamente con esto, ya organizados, hemos conseguido incluso recursos para capacitación, hemos obligado al gobierno del estado que nos presente el presupuesto y sabemos cuánto viene etiquetado.

Pero sí tenemos todavía un gran problema en las reglas de operación, sabemos que son federales, hemos ido como Cococam, como ANEC, a la Cámara de Diputados. Pienso yo que esto es muy desgastante, pero no hay de otra, si quieres un México mejor, no tienes más que quitarte la pereza. Es muy desgastante porque tienes que atender tu empresa, que debe de seguir, la gente tiene que seguir sembrando, tienes que tener tus insumos, tienes que estar comercializando, etcétera, pero aparte tienes que ponerle atención a la política pública. Y la única manera es estar organizados. Si no estamos organizados, si estamos solos, entonces ahí te la vas a llevar, te van a dar atole con el dedo. La única forma es fomentar el Observatorio Campesino.

Pero yo creo que aquí también tenemos que ser muy claros, esto para mí es muy delicado, nosotros como directivos de las organizaciones, tenemos que dar el acceso a que también seamos observados (por los campesinos miembros). No puedes tú hablar de una política pública dónde no eres congruente con lo que dices y lo que haces. En el caso de la Red, nosotros somos respetados porque sí somos “reunioleros”, y no obstante las broncas que

hay, existimos, y por lo menos tratamos que la gente de base tenga la información. La base es la claridad: no puedes exigir algo que tú mismo no ejerces.

Para María Isabel Ruiz, el Observatorio tendrá valor en la medida que sirva para vigilar las acciones de las autoridades gubernamentales y los políticos y para abrir espacio para la opinión de la gente. Dice:

Siento que es buenísimo, porque creo que es muy justo. Estamos viendo fraudes por todos lados, estamos viendo que el político ya no trabaja con amor ni con el entusiasmo del progreso de nuestro país, sino que lo están haciendo con la finalidad de llenarse los bolsillos y eso los estamos viendo desde el pueblo nuestro, y eso es triste. Por eso es importante estar vigilando y observando y estarles diciendo a la Red: “saben que, yo veo esto y así, así y así”.

Yo siento que como ciudadana tengo el deber de hacer esto, yo no quiero puestos políticos, no me interesa, sino simplemente que a esa gente debemos detenerla, y como ciudadana es mi obligación. Que los recursos se manejen como se deben manejar. Que el dinero tenga un efecto en beneficio de nuestra propia comunidad.

Joel Saldívar dice al respecto:

(El Observatorio servirá) por lo menos para tener las herramientas y decir “mira, tú me dices que es esto, pero lo que estás haciendo es otra cosa”, y con las pruebas en la mano podría servir de algo y además para darnos cuenta exactamente cómo se está gastando y a dónde se van los recursos.

Porque otra de las cosas muy importante que nos gustaría saber a muchos es cuánto es lo que se gasta en las elecciones, cuánto se gasta cada representante para poder ser elegido. y todo lo que hacen para lograr eso.

¿Por qué los campesinos, siendo tantos, no hemos logrado un mayor peso en las decisiones del gobierno? Porque no somos capaces de organizarnos, a la mejor tenemos la cultura de que lo hagan los demás, pero ¿quiénes son los demás?

Debemos tener un objetivo claro, y a partir de ese objetivo claro ser capaces de unirnos y hacer una sola voz y apoyarnos unos con otros, por eso me veía tan escéptico (en la mesa de diálogo), porque eso está muy difícil.

Joel Saldívar duda en cuanto a los tiempos del Observatorio:

Siendo muy optimistas, posiblemente el próximo año el Observatorio esté dando los primeros resultados, pero siendo pesimistas, a la mejor aquí se quedó como iniciativa. Vamos a pensar positivamente y ver qué pasa en un año.

La consideración de Ignacio Martínez sobre el Observatorio es:

Será muy bueno porque de alguna manera el gobierno se va a dar cuenta que lo están observando y al gobierno lo que menos le conviene es que le estén fiscalizando. Entonces

esa parte es buena para que vaya haciendo con mayor transparencia y mejor cuidado la distribución de los recursos.

De acuerdo con lo dialogado durante la mesa de discusión de la Asamblea de la REDCCAM, el Observatorio de Políticas Públicas de la Red es ya un hecho, si bien es cierto que comenzará de forma cautelosa, incorporando la vigilancia de tres programas, uno federal, uno estatal y uno a nivel de Distrito de Desarrollo Rural. Todo esto, con la asesoría de Fundar y de ANEC y con una petición inicial de información al aparato gubernamental, por medio de los mecanismos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Vale la pena concluir este reporte con un señalamiento de Julio Manuel Valdez, en el sentido de que el Observatorio no es un objetivo en sí mismo, sino una vía para transitar a lo que realmente se requiere: la incidencia campesina sobre las políticas públicas.

Yo creo que no tenemos el hilo negro, pero sí tenemos muchas propuestas de cómo puede esto ser mejor, porque estamos viviendo allá en el campo, y muchos de los programas se hacen en el escritorio y no en la realidad del campo.

Dentro del campo tenemos que empezar a cambiar varias cosas en las organizaciones; tenemos que empezar a trabajar con base en la rentabilidad para poder continuar con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno. Debemos buscar enfocarnos al mercado, porque si no nos vamos adaptando, va a llegar el momento en que probablemente lo que produzcamos no lo vamos a poder vender, entonces sí debemos empezar a cambiar este tipo de cosas, y urge que tengamos influencia sobre las políticas públicas.